



Bogotá, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2020 00208 00.
ACCIONANTE: ANA ELIZABETH MORALES SALAZAR.
ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
VINCULADA: DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ.
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia presencial o virtual, es decir, antes de celebrar audiencia; entre otros, en los siguientes eventos: **(i)** cuando el asunto sea de puro derecho; **(ii)** cuando no haya que practicar pruebas, **(iii)** cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, **(iv)** cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

Entonces, cumpliendo lo dispuesto en el artículo antes citado, se procede a verificar en el presente asunto, si están dadas las condiciones para prescindir de las audiencias del juicio oral.

En el presente proceso se pretende que se declare la existencia y nulidad del acto ficto configurado el 29 de febrero de 2019, con ocasión al presunto silencio administrativo negativo por parte de la entidad accionada frente a la petición radicada el 29 de noviembre de 2018, donde la parte actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías; con el correspondiente restablecimiento de derecho.

Acto seguido, se analizará la existencia de excepciones previas por resolver y el decreto de pruebas.

I. EXCEPCIONES PREVIAS.



EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, dio contestación al medio de control en término, tal como obra en el expediente digital, proponiendo como excepciones previas la de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Para resolver, se tiene que, a través de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serían administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tenga más del 90% del Capital.

A su vez, el artículo 5° de la citada ley señaló en su numeral 1°, que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tendría como objeto “Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado”, y en su artículo 9°, dispuso que las prestaciones sociales que pague el mencionado Fondo, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, y que esta función se delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales. Por lo tanto, se declarará no probada esta exceptiva.

Por su parte, la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** guardó silencio.

Así las cosas, teniendo en cuenta que esta Agencia Judicial no considera necesario proponer excepciones previas de oficio, se entiende agotada esta etapa procesal.

II. PRUEBAS PARA DECIDIR DE FONDO

La parte demandante aportó prueba documental obrante a folios 19 a 25 del expediente virtual. Solicita oficiar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que allegue certificado de salarios de la docente Ana Elizabeth Morales Salazar de los años 2017 y 2018.

Esta prueba será negada, por no ser útil y pertinente para el caso que nos ocupa, habida cuenta que con el material probatoria allegado al expediente, se considera que es suficiente para poder adoptar una decisión de fondo sobre el tema en controversia.

Por su parte la entidad demandada no solicitó práctica de pruebas diferentes a las suministradas dentro del expediente.



Conforme lo anterior, se advierte que las pruebas obrantes en el plenario son las pertinentes que le permiten al Despacho pronunciarse de fondo, de manera que no hay lugar a practicar pruebas.

Resuelto lo anterior, entonces, la **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si la demandante tiene derecho o no a que la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** le reconozca y pague la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de “*falta de legitimación en la causa por pasiva*” propuesta por la entidad vinculada; acorde con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. - DECLARAR que no existen más excepciones previas por resolver.

TERCERO. - INCORPORAR al proceso con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de prueba que acompañan la demanda, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO. - NEGAR la única prueba solicitada por la parte actora, acorde con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

QUINTO. - Prescindir de las audiencias presenciales o virtuales y tramitar el proceso de conformidad con lo normado en el artículo 182A del C.P.A.C.A.

SEXTO. - La **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si la demandante tiene derecho o no a que la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** le reconozca y pague la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

SÉPTIMO.- Reconocer personería adjetiva a **JUAN CARLOS JIMÉNEZ TRIANA** con cédula de ciudadanía No. **1.015.407.639** y Tarjeta Profesional No. **213.500** del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este



proceso como apoderado judicial principal de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ** y a **VIVIANA CAROLINA RODRÍGUEZ PRIETO** con cédula de ciudadanía No. **1.032.471.577** expedida en Bogotá y Tarjeta Profesional No. **342.450** del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y para los efectos del mandato conferido y obrante en el expediente.

OCTAVO. - Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

off